

**APOYO A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN
HONDURAS**

HO-T1278

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS)**, de conformidad con la comunicación de fecha 10 de agosto de 2017 suscrita por Dimas Tejero (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en los mencionados fondos, hasta la suma de **US\$200.000** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida hasta el 13 de diciembre del 2017. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

CERTIFICADO:	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">ORIGINAL FIRMADO</div> <div style="text-align: center;">Sonia M. Rivera Jefe de División Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento ORP/GCM</div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">12/07/2017</div> <div style="text-align: center;">Fecha</div>
APROBADO:	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">ORIGINAL FIRMADO</div> <div style="text-align: center;">Carlos Santiso Jefe de División División de Innovación para Servir al Ciudadano IFD/ICS</div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">12/08/2017</div> <div style="text-align: center;">Fecha</div>

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Honduras, CID
▪ Nombre de la CT:	Apoyo a la prevención social de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana en Honduras
▪ Número de CT:	HO-T1278
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Karelia Villa, jefe de equipo; Andrés Restrepo; Viviana Vélez; Mauricio Bastien; Pavel Munguía y Sonia Rojas (IFD/ICS); César Rivera, (ICS/CHO); Ana Sousa (LEG/SGO); Silvana Fitzpatrick (IFD/ICS).
▪ Taxonomía:	Apoyo Operativo
▪ Si es Apoyo Operativo, proveer número y nombre de la operación que apoyará la CT:	HO-L1187
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	Agosto 10, 2017
▪ Beneficiario:	Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS)
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS). Contacto Sra. Karelia Villa, Especialista Sectorial.
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$ 200.000
▪ Contrapartida Local, si hay:	No
▪ Periodo de Desembolso:	36 meses
▪ Fecha de Inicio requerido:	Enero 2018
▪ Tipos de consultores:	Firmas
▪ Unidad de Preparación:	IFD/ICS
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	IFD/ICS
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	Si
▪ CT incluida en CPD (s/n):	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Fortalecimiento de la capacidad institucional y el Estado de Derecho

II. Descripción del Préstamo Asociado:

- 2.1 La operación de préstamo asociada a esta cooperación técnica es el “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” HO-L1187, el cual se encuentra actualmente en proceso de diseño. Su objetivo es contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. En términos de indicadores de resultados, la operación prevé: (i) mejorar el acceso a los servicios básicos en barrios vulnerables intervenidos y disminuir delitos violentos como robos y delitos sexuales; (ii) reducir homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios beneficiados; y (iii) mejorar los niveles de efectividad policial a través del incremento

de casos de homicidio con autor identificado e informe criminalístico aceptado por el Ministerio Público (MP).

- 2.2 Para apoyar el resultado específico, relacionado con la reducción de la VIF en los municipios beneficiados, de la operación de préstamo en diseño, esta cooperación técnica (CT) tendrá especial énfasis en apoyar la implementación de intervenciones para fortalecer los servicios de prevención y atención a víctimas de VIF. Lo anterior dado que este delito VIF se encuentra entre los de mayor incidencia que afecta a la población vulnerable del país.
- 2.3 Adicionalmente, el cronograma de esta operación de préstamo en diseño estima su presentación al Directorio Ejecutivo del Banco para el año 2018. Actualmente, se encuentra en la etapa de preparación de la Propuesta para el Desarrollo de la Operación (POD).

III. Objetivos y Justificación de la CT

- 3.1 Pese a los avances alcanzados por Honduras en la solución de sus problemáticas de seguridad ciudadana, el país aún tiene importantes brechas que atender, tanto en el ámbito de la modernización institucional, como el mejoramiento de los instrumentos para la atención, control y prevención de los distintos tipos de violencias y delitos que afectan al país.
- 3.2 Las estrategias principales para cerrar esas brechas en materia de prevención y control de los distintos tipos de violencias y delitos y el mejoramiento de la convivencia ciudadana en el país están definidas en la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras (2011-2022)¹. Este trabajo, está ampliamente respaldado en una creciente aplicación de una gestión policial aplicada bajo una filosofía de policía comunitaria² y un ejercicio de coordinación de la acción del estado en todo el territorio. Esto, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia, bajo la dirección y rectoría de la Secretaría de Seguridad, institución responsable de la implementación de los programas y proyectos en materia de prevención del delito y la prevención de las violencias, y de la convocatoria y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.
- 3.3 Tanto la violencia homicida, como los distintos tipos de violencias contra la mujer y la violencia intrafamiliar en Honduras están altamente relacionadas con el ambiente de violencia crónica que afecta al país, estimulado por el uso aceptado de la violencia como un mecanismo de resolución de conflictos. De hecho, el 76% del total de homicidios del país se comete con arma de fuego, lo que demuestra el alto grado de violencia letal que afecta el país, contrastando con el bajo reporte de victimización

¹ [Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras 2011-2012.](#)

² La filosofía de formación en policía comunitaria tiene como objetivo mejorar la relación de policía- comunidad con base en la generación de confianza. La evidencia demuestra que la efectividad de la policía para prevenir y atender el crimen depende de su estrecha interacción con el ciudadano (Lum y Nagin, 2016). El principal rol de la policía es prevenir, identificar y atender los problemas de la comunidad (Goldstein, 1979; Wilson y Kelling, 1982). Aunque las mejoras tecnológicas son indispensables, el aumento en la disposición por parte de ciudadano de reportar los crímenes a la policía y entregarle información detallada, han tenido históricamente un impacto significativo en la efectividad de la policía (Kenney, 2013)

(18,3%) que se reporta para el país, ocupando el puesto #11 en América Latina y el Caribe (LAC)³.

- 3.4 Una de las principales brechas a resolver con urgencia, por su alto impacto social, es la alta incidencia de la violencia contra la mujer y la VIF. En Honduras, según datos del poder judicial, la violencia contra la mujer es la segunda más denunciada en el Ministerio Público. Las denuncias recibidas por los fiscales vienen presentando una tendencia ascendente, aproximadamente un 10% al año, desde 2013. En 2015, las cifras de denuncias sólo en el Distrito Central (2.099), constituyeron el 20% de todo el país (10.495). Sólo en 2014, Medicinal Legal recibió un total de 9.360 requerimientos fiscales para evaluación médico legal, de las cuales el 26,4% correspondió a mujeres agredidas afectadas por lesiones personales y el 24,4% correspondió a delitos sexuales. De los delitos sexuales, el 91,4%, fueron realizadas a mujeres y niñas menores de 24 años, y el 17% del total a menores entre 10 y 18 años⁴. Los departamentos que presentan más casos son: Francisco Morazán (29%), Cortés (23%), Comayagua (10%) y Atlántida (9%). La peor expresión de estas violencias es el femicidio, que se concentra en los departamentos de Cortés (31%) y Francisco Morazán (26,6%) del total de femicidios del país.
- 3.5 Para aportar a la solución de esta problemática, el Ministerio Público puso en marcha el Modelo de Atención Integral Especializada (MAIE), para la atención integral de las víctimas de violencias, particularmente mujeres víctimas de violencia. Los MAIE están conformados por fiscales, policías, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros profesionales. Esta atención multidisciplinaria se encuentra concentrada en un solo espacio geográfico, equipado con diversas herramientas de atención, como la Cámara de Gesell, para tomar la declaración de las víctimas en un espacio cómodo, privado, con la asistencia de personal que comprende su situación y sin verse expuestas a la presencia de la persona que cometió el delito. Bajo estas condiciones, se garantiza la participación de víctimas y testigos en los procesos penales y con ello, la materialización de la justicia. La participación de la Policía Nacional en los servicios proporcionados por el MAIE es importante, ya que permite hacer más efectivo el servicio de atención a las víctimas, al coordinarse en un mismo espacio físico con el MP, servicios de salud y otras entidades, lo que agiliza el proceso de interposición de denuncias y la implementación de medidas cautelares, en caso de requerirse.
- 3.6 Con relación a la implementación de medidas cautelares para la prevención y atención de víctimas de VIF, en la región, se están llevando a cabo intervenciones innovadoras, como las del uso de los sistemas de vigilancia electrónico como una alternativa para proteger a las víctimas de violencia doméstica y sexual. El monitoreo electrónico de infractores ha sido introducido en diversas legislaciones, para disminuir la población carcelaria, los efectos adversos del encierro, los costos que ello acarrea y mejorar las posibilidades para la reinserción. También se usa ampliamente para prevenir posibles agresiones a personas en riesgo, como es el caso de mujeres víctimas de VIF.
- 3.7 Este dispositivo se coloca en el tobillo o muñeca de la persona en conflicto con la ley penal o en la del victimario o posible agresor, y su finalidad es supervisar constantemente a la persona en espacios definidos previamente y transmitir su

³ Ibid.

⁴ Datos del Ministerio Público.

posición a una unidad de control. Por ello, su uso requiere de la combinación tanto de factores humanos como tecnológicos, debidamente regulados en las respectivas legislaciones nacionales. Su utilización está respaldada en varios instrumentos internacionales, tales como el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, las reglas de Tokio, entre otras.

- 3.8 La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y el Comité Regional de Directores Penitenciarios, coinciden en que en caso de que los brazaletes electrónicos se usaran como un medio para proteger a las víctimas y testigos, los gobiernos deberían desarrollar protocolos específicos con el fin de dar prioridad a las víctimas más vulnerables, como en los casos de violencia doméstica. Recomiendan que los gobiernos primero identifiquen los problemas que se buscan solucionar, y luego, verifiquen si el uso de este tipo de tecnología es viable tanto normativa, como tecnológicamente, en cada país. En el caso de su uso como medida de protección para los casos de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, según estas organizaciones, el estado debe: (i) garantizar la aprobación de una reglamentación que establezca el uso del brazalete electrónico de monitoreo como una medida cautelar de carácter personal e identifique la autoridad estatal responsable para implementar el programa de brazaletes electrónicos, donde se determine además, el rol de la autoridad competente para la concesión de la medida y la autoridad a cargo de su implementación; (ii) verificar la relación costo-beneficio a largo plazo para garantizar la inversión inicial necesaria para la organización de un equipo de acompañamiento psico-social y la construcción de una central de monitoreo que cuente con el software y hardware adecuados; (iii) analizar la sostenibilidad de este proyecto considerando los gastos de personal e infraestructura a largo plazo para el mantenimiento de la central de monitoreo y el seguimiento de las medidas; y (iv) en los casos de violencia contra la mujer, definir una ruta crítica interna y externa para la protección de las víctimas de violencia doméstica, donde el brazalete electrónico de monitoreo esté contemplado como una de las alternativas de protección.
- 3.9 Esta ruta interna hoja crítica de aplicación, deberá contar con una etapa de investigación interdisciplinaria (informes sociales y psicológicos) que evalúe los riesgos sufridos por las víctimas (directas e indirectas) y recomiende la aplicación del brazalete electrónico conforme a las necesidades de cada caso. También deberá contemplar el trabajo interinstitucional necesario para implementar esta tecnología y definir con absoluta claridad cuáles son las autoridades judiciales, policiales y administrativas involucradas en el proceso de otorgamiento, cumplimiento y seguimiento de la medida
- 3.10 El objetivo de esta CT es fortalecer las capacidades de la Secretaría de Seguridad de Honduras para dirigir las intervenciones de prevención social de violencias y delitos en los municipios y barrios más afectados del país, especialmente para mejorar sus servicios de prevención y atención de violencia intrafamiliar, a través de: (i) la sistematización de experiencias y difusión de conocimiento en prevención social de la violencia intrafamiliar VIF en LAC para su homologación en Honduras; (ii) el diseño y puesta en marcha de un protocolo de registro, derivación y seguimiento de víctimas de VIF; y (iii) desarrollo de capacidades técnicas de la policía para la atención de víctimas de VIF.

- 3.11 El programa es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea estratégicamente con los desafíos de (i) exclusión social y desigualdad, específicamente exclusiones de minorías por razones de género, y con el aspecto transversal de igualdad de género y diversidad. Asimismo, se alinea con el desafío de desarrollo de (ii) productividad e innovación mediante el desarrollo de capital humano de calidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Además, con la CT propuesta se alinea con la Estrategia del Banco con Honduras 2015-2018 (GN-2796-1) en específico con el tema prioritario de Desarrollo Sostenible en el Distrito Central, donde el Banco buscará reducir la marginalidad y mejorar la calidad urbana en el Distrito Central mediante el mejoramiento de la seguridad ciudadana, como una de las cuatro áreas de acción ante las problemáticas urbanas. Adicionalmente, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana se considera como un área de diálogo con el país. Asimismo, coincide con la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2), que identifica como una de sus acciones la de mejorar la gestión institucional de los servicios policiales, así como respaldar el fortalecimiento de las instituciones nacionales y locales en la esfera de la coexistencia cívica y la seguridad pública. De igual forma, el tema de la capacidad institucional para un Estado de Derecho sólido, también se aborda como prioritario en el Marco de Resultados Corporativos del Banco 2016-2019. Finalmente, el Fondo del Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS) (GN-2819-1), contempla apoyar a las actividades para mejorar las agencias de seguridad y justicia, específicamente en el diseño de estrategias de seguridad ciudadana en el ámbito nacional y municipal, que aseguren la coordinación vertical entre los distintos niveles de gobierno, mecanismos de financiamiento, planificación, información y seguimiento y evaluación.
- 3.12 Asimismo, el proyecto está alineado con las actividades contempladas en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTAN). En concreto, el apoyo que estará dando esta CT es para contribuir a mejorar los servicios de atención a víctimas de VIF, en consistencia con la línea estratégica del PAPTAN para mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia de víctimas de VIF. En específico con la línea de acción de: “Ampliar y fortalecer los servicios y centros integrados de atención a víctimas, a través de la implementación de un modelo de intervención integral para la atención a mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia, especialmente la intrafamiliar y de género⁵.”

IV. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 4.1 **Componente 1: Sistematización de experiencias y difusión de conocimiento en prevención social de la VIF en LAC para su homologación en Honduras (US\$90.000):** El objetivo de este componente es analizar los casos más promisorios del uso del monitoreo electrónico para la prevención de VIF, para contribuir al diseño un modelo aplicable al contexto nacional de Honduras. Lo anterior, a través de: (i) elaborar un diagnóstico sobre el avance en la implementación de programas pilotos de monitoreo electrónico para victimarios de violencia contra la mujer, que permita analizar, sistematizar y evaluar su implementación en la región de LAC; (ii) verificar las condiciones técnicas, tecnológicas, institucionales y legales existentes en

⁵ Triángulo Norte: Construyendo confianza, creando oportunidades, [Documento elaborado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.](#)

Honduras para la implementación de un modelo de monitoreo electrónico para la prevención de la VIF, y hacer recomendaciones para cada caso; y (iii) compartir el aprendizaje derivado del diagnóstico a través de una publicación⁶.

- 4.2 Resultado esperado: diagnóstico analítico y cualitativo sobre prácticas de monitoreo electrónico para la prevención de la VIF en Honduras; sistematización y publicación de las buenas prácticas identificadas; y estudio de viabilidad técnica, tecnológica, institucional y legal para su implementación en Honduras.
- 4.3 **Componente 2: Desarrollo de un protocolo de registro, derivación y seguimiento para la prevención social de la VIF (US\$60.000).** Este componente tiene como objetivo apoyar al MAIE a través del diseño de una herramienta de registro para la derivación y seguimiento en la atención de casos de Violencia intrafamiliar y social, a través de: (i) diseñar e implementar protocolos de registro y recepción de casos de mujeres víctimas de VIF en los MAIE; (ii) apoyar el funcionamiento de los mecanismos de derivación para la atención a víctimas en los MAIE, específicamente en las Unidades Metropolitanas de la Policía Nacional, en la colonia Kennedy. Lo anterior mediante la elaboración de un mapeo detallado de la oferta de servicios de atención y la elaboración de una guía para orientar a las víctimas de VIF y un manual de capacitación para los operadores del MAIE.
- 4.4 Resultado esperado: Mejorar los procesos de intervención en el actuar policial para atender los casos de violencia intrafamiliar en los MAIE.
- 4.5 **Componente 3: Desarrollo de capacidades técnicas de la policía para la atención de víctimas de VIF (US\$50.000).** El objetivo del componente es brindar capacitación técnica a la policía para la atención de mujeres víctimas de VIF, a través de: (i) la modernización curricular de los módulos de formación de la policía para la atención, prevención y control de violencias que afectan a las mujeres y la VIF; y, (ii) capacitación a los policías asignados a los MAIE en la ruta de atención a víctimas de violencia intrafamiliar.
- 4.6 Resultado esperado: fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional de Honduras para la prevención y control de la VIF y para la prestación de un mejor servicio en los MAIEs.

Presupuesto indicativo

- 4.7 El presupuesto total del proyecto será de US\$200.000, que serán financiados por el Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS). El siguiente cuadro resume las principales actividades y su costo:

Actividad/Componente	Descripción	BID/INS	Financiamiento Total
Componente 1: Sistematización de experiencias y difusión de conocimiento en	Diagnóstico, mapeo y evaluación sobre la implementación de sistemas de monitoreo electrónico para victimarios de	80.000	80.000

⁶ Esta sistematización, estará liderada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS) de Honduras y se llevará a cabo tomando en consideración los aportes del Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instancias que resulten relevantes durante la implementación de este análisis.

prevención social de la violencia intrafamiliar VIF en LAC para su homologación en Honduras	violencia contra intrafamiliar y análisis de viabilidad para atender y prevenir casos de VIF en Honduras.		
	Publicación de mejores prácticas en sistemas de monitoreo electrónico para victimarios en la atención y prevención de VIF.	10.000	10.000
	Sub-Total Componente 1	90.000	90.000
Componente 2: Desarrollo de un protocolo de registro, derivación y seguimiento para la prevención social de la violencia intrafamiliar	Diseño y adaptación de la metodología de intervención para la atención y recepción de víctimas de VIF en los MAIE.	30.000	30.000
	Apoyo al funcionamiento de los mecanismos de derivación para la atención a víctimas en los MAIE.	30.000	30.000
	Sub-Total Componente 2	60.000	60.000
Componente 3: Desarrollo de capacidades técnicas en policía comunitaria – en específico a los hechos de violencia intrafamiliar modelo de atención a mujeres víctimas de violencia	Modernización curricular de los módulos de formación de la policía para la atención, prevención y control de violencias que afectan a las mujeres y la VIF	30.000	30.000
	Capacitación a los policías asignados a los MAIE en la ruta de atención a víctimas de violencia intrafamiliar)	20.000	20.000
	Sub-Total Componente 3	50.000	50.000
Total		200.000	200.000

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 5.1 El organismo ejecutor (OE) de esta CT será el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS) en estrecha coordinación con la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Esta solicitud se justifica en cuanto el Banco, a través de IFD/ICS, tiene amplia experiencia en intervenciones de prevención social de la violencia, en específico en temas de monitoreo electrónico. A través del trabajo realizado en proyectos de Seguridad Ciudadana en El Salvador y Costa Rica, donde se incluyen intervenciones piloto con estas características, el Banco podrá poner a disposición del beneficiario de esta CT, estas experiencias y el expertise técnico de los principales consultores de la región. Por otra parte, para facilitar el costo transaccional de los contratos y adquisiciones, se propone que el Banco ejecute esta CT. Para lo anterior, se contratará los servicios de firmas consultoras de conformidad con las Políticas de Selección y Contratación de Consultores (GN-2350-9); para la contratación de consultores individuales se utilizarán las normas y procedimientos de HRD (AM 650); y para la adquisición de servicios diferentes de consultoría (logística, talleres, organización de eventos, publicaciones, entre otros), se utilizarán las Políticas Corporativas del Banco (GN- 2303-20). De igual forma, para asegurar la buena ejecución de esta CT, se prepararán una serie de reportes anuales sobre las actividades realizadas, evidenciando productos y resultados alcanzados.
- 5.2 Para llevar a cabo la implementación de esta CT, se tendrá como condición previa al primer desembolso contar con la carta de solicitud por parte del Gobierno, para que el Banco ejecute esta operación.

VI. Riesgos importantes

- 6.1 No se cuenta con información estadística desagregada para todos los delitos, salvo para homicidios, a nivel de barrios y colonias, que provenga de fuentes homologadas. En el caso específico de la violencia de género y violencia doméstica, diversas instancias del gobierno concentran los datos, debido a que la recolección se hace de acuerdo con la tipificación del delito. Esto podría dificultar la focalización de las actividades de prevención social de la violencia. Para mitigar este riesgo, se estará trabajando con el Observatorio Nacional de la Violencia, a fin de obtener la mayor información posible y realizar los diagnósticos correspondientes.

VII. Excepciones a las políticas del Banco

- 7.1 El proyecto no considera excepciones a las políticas del Banco.

VIII. Salvaguardias Ambientales

- 8.1 La presente CT no tiene implicaciones ambientales ni sociales, por tratarse de los servicios de consultoría para la realización de estudios. De acuerdo a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) esta CT se clasifica como Categoría “B”, ya que financiará consultorías y estudios técnicos en apoyo a la operación HO-L1187, la cual ha sido clasificada como Categoría “B”, y es por eso que la CT está dentro de la misma categoría. Ver [Safeguard Policy Filter \(SPF\) y Safeguard Screening Form \(SSF\)](#).

Anexos Requeridos:

- Anexo I: [Matriz de Resultados](#)
- Anexo II: [Términos de Referencia](#)
- Anexo III: [Plan de Adquisiciones](#)




Results Matrix

Outcomes

Outcome: 1 Intrafamily Violence Prevention and Care Services of the Ministry of Security of Honduras improved.											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2018	2019	2020	EOP	
1.1 Design of a data collection protocol system, referral mechanism and monitoring of victims of domestic violence.		number	0.00	2017	Annual report	P	0.00	1.00	0.00	1.00	
						P(a)				0.00	
						A				0.00	
1.2 Implementation of a data collection protocol system, referral mechanism and monitoring of victims of domestic violence.		number	0.00	2017	Annual report	P	0.00	0.00	1.00	1.00	
						P(a)				0.00	
						A				0.00	
1.3 Systematization of experiences and dissemination of knowledge in social prevention of intrafamily violence (VIF) in LAC for its homologation in Honduras		number	0.00	2017	Annual report	P	0.00	1.00	0.00	1.00	
						P(a)				0.00	
						A				0.00	
Outcome: 2 Strengthening the capacities of the Honduran National Police for the prevention and control of cases of Intra-family Violence											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2018	2019	2020	EOP	
2.1 Designed of intervention processes in police action to address cases of intrafamily violence in the MAIE.		number	0.00	2017	Annual report	P	0.00	1.00	0.00	1.00	
						P(a)				0.00	
						A				0.00	
2.2 Technical capacities of the National Police improved for the care of victims of domestic violence.		number	0.00	2017	Annual report	P	0.00	1.00	0.00	1.00	
						P(a)				0.00	
						A				0.00	

RF - Contribution

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Systematization of experiences and dissemination of knowledge in social prevention of VIF in LAC for its homologation in Honduras						Physical Progress					Financial Progress								
Outputs		Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2018	2019	2020	EOP	2018	2019	2020	EOP	Theme	Fund	Flags		
1.1 Recommendations from adaptation study implemented		Technical, technological, institutional and legal viability study for the implementation of the electronic monitoring model for the prevention of VIF.	Studies (#)	0	2017	Final Report	P	0	0	1	1	P	0	0	90000	90000	Labor Markets	INS	
							P(a)				0	P(a)				0			
							A					A							
2 Development of a registration protocol, referral and follow-up for the social prevention of the VIF						Physical Progress					Financial Progress								
Outputs		Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2018	2019	2020	EOP	2018	2019	2020	EOP	Theme	Fund	Flags		
2.1 Tools designed/strengthened		Improved intervention processes in police action to deal with cases of intrafamily violence in the MAIE.	Tools (#)	0	2017	Final Report	P	1	0	0	1	P	60000			60000	Citizen Security	INS	
							P(a)				0	P(a)				0			
							A					A							
3 Development of technical capacities of the police for the care of VIF victims						Physical Progress					Financial Progress								
Outputs		Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2018	2019	2020	EOP	2018	2019	2020	EOP	Theme	Fund	Flags		
3.1 Institutions trained		Strengthened capacities of the Honduran National Police for the prevention and control of the VIF and for the provision of a better service in the MAIEs.	Institutions (#)	0	2017	Reports	P	1	0	0	1	P	50000			50000	Citizen Security	INS	
							P(a)				0	P(a)				0			
							A					A							

Other Cost

Total Cost

	2018	2019	2020	Total Cost
P	\$110,000.00		\$90,000.00	\$200,000.00
P(a)				
A				

CRF Indicator

Standard Output Indicator

[Estructura sugerida] Proceso de selección #:.....

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Diagnóstico, mapeo y evaluación sobre la implementación de sistemas de monitoreo electrónico para victimarios de violencia contra intrafamiliar y análisis de viabilidad para atender y prevenir casos de VIF en Honduras

Honduras
HO-T1278

Número de Cooperación Técnica]

[Enlace web con el documento aprobado]

Apoyo a la prevención social de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana en honduras

1. Antecedentes y Justificación

- 1.1. (Pese a los avances alcanzados por Honduras en la solución de sus problemáticas de seguridad ciudadana, el país aún tiene importantes brechas que atender, tanto en el ámbito de la modernización institucional, como el mejoramiento de los instrumentos para la atención, control y prevención de los distintos tipos de violencias y delitos que afectan al país.
- 1.2. Las estrategias principales para cerrar esas brechas en materia de prevención y control de los distintos tipos de violencias y delitos y el mejoramiento de la convivencia ciudadana en el país están definidas en la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras (2011-2022). Este trabajo, está ampliamente respaldado en una creciente aplicación de una gestión policial aplicada bajo una filosofía de policía comunitaria y un ejercicio de coordinación de la acción del estado en todo el territorio. Esto, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia, bajo la dirección y rectoría de la Secretaría de Seguridad, institución responsable de la implementación de los programas y proyectos en materia de prevención del delito y la prevención de las violencias, y de la convocatoria y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.
- 1.3. Tanto la violencia homicida, como los distintos tipos de violencias contra la mujer y la violencia intrafamiliar en Honduras están altamente relacionados con el ambiente de violencia crónica que afecta al país, estimulado por el uso aceptado de la violencia como un mecanismo de resolución de conflictos. De hecho, el 76% del total de homicidios del país se comete con arma de fuego, lo que demuestra el alto grado de violencia letal que afecta el país, contrastando con el bajo reporte de victimización (18.3%) que se reporta para el país, ocupando el puesto #11 en América Latina y el Caribe (LAC).
- 1.4. Una de las principales brechas a resolver con urgencia, por su alto impacto social, es la alta incidencia de la violencia contra la mujer y la Violencia Intrafamiliar (VIF). En Honduras, según datos del poder judicial, la violencia contra la mujer es la segunda más denunciada en el Ministerio Público. Las denuncias recibidas por los fiscales vienen presentando una tendencia ascendente, aproximadamente un 10% al año, desde 2013. En 2015, las cifras de denuncias sólo en el Distrito Central (2.099), constituyeron el 20% de todo el país (10.495). Sólo en 2014,

Medicinal Legal recibió un total de 9.360 requerimientos fiscales para evaluación médico legal, de las cuales el 26,4% correspondió a mujeres agredidas afectadas por lesiones personales y el 24,4% correspondió a delitos sexuales. De los delitos sexuales, el 91,4%, fueron realizadas a mujeres y niñas menores de 24 años, y el 17% del total a menores entre 10 y 18 años. Los departamentos que presentan más casos son: Francisco Morazán (29%), Cortés (23%), Comayagua (10%) y Atlántida (9%). La peor expresión de estas violencias es el femicidio, que se concentra en los departamentos de Cortés (31%) y Francisco Morazán (26,6%) del total de femicidios del país.

- 1.5. Para aportar a la solución de esta problemática, el Ministerio Público puso en marcha el Modelo de Atención Integral Especializada (MAIE), para la atención integral de las víctimas de violencias, particularmente mujeres víctimas de violencia. Los MAIE están conformados por fiscales, policías, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros profesionales. Esta atención multidisciplinar se encuentra concentrada en un solo espacio geográfico, equipado con diversas herramientas de atención, como la Cámara de Gesell, para tomar la declaración de las víctimas en un espacio cómodo, privado, con la asistencia de personal que comprende su situación y sin verse expuestas a la presencia de la persona que cometió el delito. Bajo estas condiciones, se garantiza la participación de víctimas y testigos en los procesos penales y con ello, la materialización de la justicia. La participación de la Policía Nacional en el MAIE ha sido crucial, ya que permite hacer más efectivo el servicio de atención a las víctimas de VIF, al coordinarse sus servicios con el MP al proveer espacios adecuados para atender a las víctimas, facilitar el proceso de denuncia y apoyar al MP en la implementación de las medidas cautelares, en algunos casos.
- 1.6. Con relación a la implementación de medidas cautelares para la prevención y atención de víctimas de VIF, en la región, se están llevando a cabo intervenciones innovadoras, como las del uso de los sistemas de vigilancia electrónico como una alternativa para proteger a las víctimas de violencia doméstica y sexual. El monitoreo electrónico de infractores ha sido introducido en diversas legislaciones, para disminuir la población carcelaria, los efectos adversos del encierro, los costos que ello acarrea y mejorar las posibilidades para la reinserción. También se usa ampliamente para prevenir posibles agresiones a personas en riesgo, como es el caso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
- 1.7. Este dispositivo se coloca en el tobillo o muñeca de la persona en conflicto con la ley penal o en la del victimario o posible agresor, y su finalidad es supervisar constantemente a la persona en espacios definidos previamente y transmitir su posición a una unidad de control. Por ello, su uso requiere de la combinación tanto de factores humanos como tecnológicos, debidamente regulados en las respectivas legislaciones nacionales. Su utilización está respaldada en varios instrumentos internacionales, tales como el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, las reglas de Tokio, entre otras.
- 1.8. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y el Comité Regional de Directores Penitenciarios, coinciden en que en caso de que los brazaletes electrónicos se usaran como un medio para proteger a las víctimas y testigos, los gobiernos deberían desarrollar protocolos específicos con el fin de dar prioridad a las víctimas más vulnerables, como en los casos de violencia doméstica. Recomiendan que los gobiernos primero identifiquen los problemas que se buscan solucionar, y luego, verifiquen si el uso de este tipo de tecnología es viable tanto normativa, como tecnológicamente, en cada país.

En el caso de su uso como medida de protección para los casos de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, según estas organizaciones, el estado debe: (i) garantizar la aprobación de una reglamentación que establezca el uso del brazalete electrónico de monitoreo como una medida cautelar de carácter personal e identifique la autoridad estatal responsable para implementar el programa de brazaletes electrónicos, donde se determine además, el rol de la autoridad competente para la concesión de la medida y la autoridad a cargo de su implementación; (ii) verificar la relación costo beneficio a largo plazo para garantizar la inversión inicial necesaria para la organización de un equipo de acompañamiento psico-social y la construcción de una central de monitoreo que cuente con el software y hardware adecuados; (iii) analizar la sostenibilidad de este proyecto considerando los gastos de personal e infraestructura a largo plazo para el mantenimiento de la central de monitoreo y el seguimiento de las medidas; y (iv) en los casos de violencia contra la mujer, definir una ruta crítica interna y externa para la protección de las víctimas de violencia doméstica, donde el brazalete electrónico de monitoreo esté contemplado como una de las alternativas de protección.

- 1.9. Esta ruta interna “hoja crítica de aplicación”, deberá contar con una etapa de investigación interdisciplinaria (informes sociales y psicológicos) que evalúe los riesgos sufridos por las víctimas (directas e indirectas) y recomiende la aplicación del brazalete electrónico conforme a las necesidades de cada caso. También deberá contemplar el trabajo interinstitucional necesario para implementar esta tecnología y definir con absoluta claridad cuáles son las autoridades judiciales, policiales y administrativas involucradas en el proceso de otorgamiento, cumplimiento y seguimiento de la medida.

2. Objetivos

- 2.1. El objetivo de esta consultoría es analizar los casos más promisorios del uso del monitoreo electrónico para la prevención de VIF, para contribuir al diseño un modelo aplicable al contexto nacional de Honduras.

3. Alcance de los Servicios

- 3.1. (Proporcionar requisitos detallados de los servicios de consultoría necesarios para que el proyecto / contrato tenga éxito)

4. Actividades Clave

- 4.1. La consultoría deberá realizar las siguientes actividades, sin perjuicio, de otras que considere relevantes para lograr el objetivo de la misma.
- 4.2. Elaborar un diagnóstico y mapeo de experiencias implementadas en LAC en el marco de sistemas de monitoreo electrónico para victimarios de violencia.
- 4.3. Identificar el marco legal, institucional y reglamentario requerido para la implementación del Sistema de Monitoreo electrónico para victimarios de violencia en la región de LAC.
- 4.4. Identificar casos de éxito en la implementación de dicho sistema en países de la región.

- 4.5. Coordinar una mesa de trabajo técnica institucional con los actores institucionales para la definición del modelo de atención a víctimas de violencia contra la mujer.
- 4.6. Realizar un análisis de viabilidad para atender y prevenir casos de VIF en Honduras.
- 4.7. Analizar experiencias internacionales en la materia e incorporar las mejores prácticas en la propuesta definida.
- 4.8. Proponer los arreglos institucionales requeridos en el marco de la implementación del sistema de monitoreo electrónico en Honduras.

5. Resultados y Productos Esperados

- 5.1. Plan de trabajo.
- 5.2. Diagnóstico y mapeo de experiencias implementadas en LAC en el marco de sistemas de monitoreo electrónico para victimarios de violencia.
- 5.3. Documento con el marco legal, institucional y reglamentario requerido para la implementación del Sistema de Monitoreo electrónico para victimarios de violencia en la región de LAC.
- 5.4. Estudio sobre casos de éxito en la implementación del Sistema de Monitoreo electrónico para victimarios de violencia en países de la región.
- 5.5. Documento de análisis de viabilidad para atender y prevenir casos de VIF en Honduras.
- 5.6. Documento de análisis de las experiencias internacionales y mejores prácticas en la materia.
- 5.7. Documentos de propuesta de los arreglos institucionales requeridos en el marco de la implementación del sistema de monitoreo electrónico en Honduras.

6. Calendario del Proyecto e Hitos

- 6.1. *(Defina el calendario de entregables e hitos para este proyecto / contrato. Es imperativo que todos los hitos, tareas, y el calendario de entregables sean lo más precisos posible, ya que las firmas consultoras deberán tener en cuenta estos elementos en sus propuestas.)*

7. Requisitos de los Informes

- 7.1. *(Describa los informes que la firma de consultoría tendrá que presentar para cada fase del proyecto. Por ejemplo: el alcance y la cronología de los informes de progreso; la necesidad de presentaciones / talleres; la cobertura y cronología de los informes, estableciendo los resultados de la consultoría. Defina también el lenguaje de los informes)*

8. Criterios de aceptación

- 8.1. *Experiencia en desarrollo de diagnósticos sobre programas de prevención de VIF en América*

latina y el Caribe. Conocimiento sobre temas de tecnología, estructura organizacional y legal de instituciones de seguridad ciudadana. Familiaridad con el Sistema de Monitoreo electrónico para victimarios de violencia en países de la región.

9. **Otros Requisitos**

9.1. *(Describa los requisitos especiales, como los requisitos de seguridad, cualquier restricción de acceso /requisitos de TI o el tiempo de inactividad del sistema/de mantenimiento si es necesario.)*

10. **Supervisión e Informes**

10.1. *Esta consultoría será coordinada por Karelia Villa Mar (IFD/ICS), kareliav@iadb.org*

11. **Calendario de Pagos**

11.1. Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.

11.2. La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Para Selección de Fuente Única, indique el calendario de pagos de la siguiente manera, para otros métodos de selección, la Firma Consultora debe usar el Formulario 2 de Precios incluido en el SDP.

Plan de Pagos	
Entregables	%
1. <i>contra entrega y aprobación de los productos 1 y 2</i>	20%
2. <i>contra entrega y aprobación de los productos 3 y 4</i>	20%
3. <i>contra entrega y aprobación de los productos 5, 6 y 7</i>	60%
TOTAL	100%

[Estructura sugerida] Proceso de selección #:.....

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Diseño y adaptación de la metodología de intervención para la atención y recepción de víctimas de VIF en los MAIE

Honduras
HO-T1278

Número de Cooperación Técnica]

[Enlace web con el documento aprobado]

Apoyo a la prevención social de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana en honduras

1. Antecedentes y Justificación

- 1.1. Pese a los avances alcanzados por Honduras en la solución de sus problemáticas de seguridad ciudadana, el país aún tiene importantes brechas que atender, tanto en el ámbito de la modernización institucional, como el mejoramiento de los instrumentos para la atención, control y prevención de los distintos tipos de violencias y delitos que afectan al país.
- 1.2. Las estrategias principales para cerrar esas brechas en materia de prevención y control de los distintos tipos de violencias y delitos y el mejoramiento de la convivencia ciudadana en el país están definidas en la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras (2011-2022). Este trabajo, está ampliamente respaldado en una creciente aplicación de una gestión policial aplicada bajo una filosofía de policía comunitaria y un ejercicio de coordinación de la acción del estado en todo el territorio. Esto, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia, bajo la dirección y rectoría de la Secretaría de Seguridad, institución responsable de la implementación de los programas y proyectos en materia de prevención del delito y la prevención de las violencias, y de la convocatoria y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.
- 1.3. Tanto la violencia homicida, como los distintos tipos de violencias contra la mujer y la violencia intrafamiliar en Honduras están altamente relacionados con el ambiente de violencia crónica que afecta al país, estimulado por el uso aceptado de la violencia como un mecanismo de resolución de conflictos. De hecho, el 76% del total de homicidios del país se comete con arma de fuego, lo que demuestra el alto grado de violencia letal que afecta el país, contrastando con el bajo reporte de victimización (18.3%) que se reporta para el país, ocupando el puesto #11 en América Latina y el Caribe (LAC).
- 1.4. Una de las principales brechas a resolver con urgencia, por su alto impacto social, es la alta incidencia de la violencia contra la mujer y la Violencia Intrafamiliar (VIF). En Honduras, según datos del poder judicial, la violencia contra la mujer es la segunda más denunciada en el Ministerio Público. Las denuncias recibidas por los fiscales vienen presentando una tendencia ascendente, aproximadamente un 10% al año, desde 2013. En 2015, las cifras de denuncias sólo en el Distrito Central (2.099), constituyeron el 20% de todo el país (10.495). Sólo en 2014,

Medicinal Legal recibió un total de 9.360 requerimientos fiscales para evaluación médico legal, de las cuales el 26,4% correspondió a mujeres agredidas afectadas por lesiones personales y el 24,4% correspondió a delitos sexuales. De los delitos sexuales, el 91,4%, fueron realizadas a mujeres y niñas menores de 24 años, y el 17% del total a menores entre 10 y 18 años. Los departamentos que presentan más casos son: Francisco Morazán (29%), Cortés (23%), Comayagua (10%) y Atlántida (9%). La peor expresión de estas violencias es el femicidio, que se concentra en los departamentos de Cortés (31%) y Francisco Morazán (26,6%) del total de femicidios del país.

- 1.5. Para aportar a la solución de esta problemática, el Ministerio Público puso en marcha el Modelo de Atención Integral Especializada (MAIE), para la atención integral de las víctimas de violencias, particularmente mujeres víctimas de violencia. Los MAIE están conformados por fiscales, policías, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros profesionales. Esta atención multidisciplinar se encuentra concentrada en un solo espacio geográfico, equipado con diversas herramientas de atención, como la Cámara de Gesell, para tomar la declaración de las víctimas en un espacio cómodo, privado, con la asistencia de personal que comprende su situación y sin verse expuestas a la presencia de la persona que cometió el delito. Bajo estas condiciones, se garantiza la participación de víctimas y testigos en los procesos penales y con ello, la materialización de la justicia. La participación de la Policía Nacional en el MAIE ha sido crucial, ya que permite hacer más efectivo el servicio de atención a las víctimas de VIF, al coordinarse sus servicios con el MP al proveer espacios adecuados para atender a las víctimas, facilitar el proceso de denuncia y apoyar al MP en la implementación de las medidas cautelares, en algunos casos.
- 1.6. Con relación a la implementación de medidas cautelares para la prevención y atención de víctimas de VIF, en la región, se están llevando a cabo intervenciones innovadoras, como las del uso de los sistemas de vigilancia electrónico como una alternativa para proteger a las víctimas de violencia doméstica y sexual. El monitoreo electrónico de infractores ha sido introducido en diversas legislaciones, para disminuir la población carcelaria, los efectos adversos del encierro, los costos que ello acarrea y mejorar las posibilidades para la reinserción. También se usa ampliamente para prevenir posibles agresiones a personas en riesgo, como es el caso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
- 1.7. Este dispositivo se coloca en el tobillo o muñeca de la persona en conflicto con la ley penal o en la del victimario o posible agresor, y su finalidad es supervisar constantemente a la persona en espacios definidos previamente y transmitir su posición a una unidad de control. Por ello, su uso requiere de la combinación tanto de factores humanos como tecnológicos, debidamente regulados en las respectivas legislaciones nacionales. Su utilización está respaldada en varios instrumentos internacionales, tales como el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, las reglas de Tokio, entre otras.
- 1.8. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y el Comité Regional de Directores Penitenciarios, coinciden en que en caso de que los brazaletes electrónicos se usaran como un medio para proteger a las víctimas y testigos, los gobiernos deberían desarrollar protocolos específicos con el fin de dar prioridad a las víctimas más vulnerables, como en los casos de violencia doméstica. Recomiendan que los gobiernos primero identifiquen los problemas que se buscan solucionar, y luego, verifiquen si el uso de este tipo de tecnología es viable tanto normativa, como tecnológicamente, en cada país.

En el caso de su uso como medida de protección para los casos de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, según estas organizaciones, el estado debe: (i) garantizar la aprobación de una reglamentación que establezca el uso del brazalete electrónico de monitoreo como una medida cautelar de carácter personal e identifique la autoridad estatal responsable para implementar el programa de brazaletes electrónicos, donde se determine además, el rol de la autoridad competente para la concesión de la medida y la autoridad a cargo de su implementación; (ii) verificar la relación costo beneficio a largo plazo para garantizar la inversión inicial necesaria para la organización de un equipo de acompañamiento psico-social y la construcción de una central de monitoreo que cuente con el software y hardware adecuados; (iii) analizar la sostenibilidad de este proyecto considerando los gastos de personal e infraestructura a largo plazo para el mantenimiento de la central de monitoreo y el seguimiento de las medidas; y (iv) en los casos de violencia contra la mujer, definir una ruta crítica interna y externa para la protección de las víctimas de violencia doméstica, donde el brazalete electrónico de monitoreo esté contemplado como una de las alternativas de protección.

- 1.9. Esta ruta interna “hoja crítica de aplicación”, deberá contar con una etapa de investigación interdisciplinaria (informes sociales y psicológicos) que evalúe los riesgos sufridos por las víctimas (directas e indirectas) y recomiende la aplicación del brazalete electrónico conforme a las necesidades de cada caso. También deberá contemplar el trabajo interinstitucional necesario para implementar esta tecnología y definir con absoluta claridad cuáles son las autoridades judiciales, policiales y administrativas involucradas en el proceso de otorgamiento, cumplimiento y seguimiento de la medida.

2. Objetivos

- 2.1. El objetivo de esta consultoría es apoyar al Modelo de Atención Integral Especializada (MAIE) a través del diseño de una herramienta de registro para la derivación y seguimiento en la atención de casos de Violencia intrafamiliar y social.

3. Alcance de los Servicios

- 3.1. (Proporcionar requisitos detallados de los servicios de consultoría necesarios para que el proyecto / contrato tenga éxito)

4. Actividades Clave

- 4.1. La consultoría deberá realizar las siguientes actividades, sin perjuicio, de otras que considere relevantes para lograr el objetivo de la misma:
- 4.2. Diseñar, validar y ajustar una metodología que mejore las intervenciones de los diferentes actores para la atención y recepción de víctimas de VIF adecuada a las condiciones de los MAIE.
- 4.3. Elaboración de una herramienta de registro (o adecuación de las existentes) para apoyar el seguimiento a los casos de atención ciudadana.
- 4.4. Coordinar reuniones/entrevistas con actores clave para identificar los requerimientos para la implementación de la metodología de intervención.
- 4.5. Elaborar un protocolo de registro de casos atendidos en los MAIE.

5. Resultados y Productos Esperados

- 5.1. Plan de trabajo.
- 5.2. Diseño de una metodología para mejorar las intervenciones de los diferentes actores para la atención y recepción de víctimas de VIF.
- 5.3. Herramienta de registro para apoyar el seguimiento a los casos de atención ciudadana
- 5.4. Documento de identificación de requerimientos para la implementación de la metodología de intervención.
- 5.5. Protocolo de registro de casos atendidos en los MAIE.

6. Calendario del Proyecto e Hitos

- 6.1. *(Defina el calendario de entregables e hitos para este proyecto / contrato. Es imperativo que todos los hitos, tareas, y el calendario de entregables sean lo más precisos posible, ya que las firmas consultoras deberán tener en cuenta estos elementos en sus propuestas.)*

7. Requisitos de los Informes

- 7.1. *(Describa los informes que la firma de consultoría tendrá que presentar para cada fase del proyecto. Por ejemplo: el alcance y la cronología de los informes de progreso; la necesidad de presentaciones / talleres; la cobertura y cronología de los informes, estableciendo los resultados de la consultoría. Defina también el lenguaje de los informes)*

8. Criterios de aceptación

- 8.1. *Experiencia en el diseño de metodologías para mejorar las intervenciones en materia de prevención de la VIF en América latina y el Caribe. Conocimiento sobre herramientas de registro para dar seguimiento a casos de atención ciudadana por VIF en la región. Familiaridad con los modelos innovadores de prevención de VIF.*

9. Otros Requisitos

- 9.1. *(Describa los requisitos especiales, como los requisitos de seguridad, cualquier restricción de acceso /requisitos de TI o el tiempo de inactividad del sistema/de mantenimiento si es necesario.)*

10. Supervisión e Informes

- 10.1. *Esta consultoría será coordinada por Karelia Villa Mar (IFD/ICS), kareliav@iadb.org*

11. Calendario de Pagos

- 11.1. Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.
- 11.2. La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Para Selección de Fuente Única, indique el calendario de pagos de la siguiente manera, para otros métodos de selección, la Firma Consultora debe usar el Formulario 2 de Precios incluido en el SDP.

Plan de Pagos	
Entregables	%
1. <i>contra entrega y aprobación de los productos 1 y 2</i>	20%
2. <i>contra entrega y aprobación de los productos 3 y 4</i>	20%
3. <i>contra entrega y aprobación del producto 5</i>	60%
TOTAL	100%

[Estructura sugerida] Proceso de selección #::::::

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Apoyo al funcionamiento de los mecanismos de derivación para la atención a víctimas en los MAIE Honduras

HO-T1278

Número de Cooperación Técnica]

[Enlace web con el documento aprobado]

Apoyo a la prevención social de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana en honduras

1. Antecedentes y Justificación

- 1.1. Pese a los avances alcanzados por Honduras en la solución de sus problemáticas de seguridad ciudadana, el país aún tiene importantes brechas que atender, tanto en el ámbito de la modernización institucional, como el mejoramiento de los instrumentos para la atención, control y prevención de los distintos tipos de violencias y delitos que afectan al país.
- 1.2. Las estrategias principales para cerrar esas brechas en materia de prevención y control de los distintos tipos de violencias y delitos y el mejoramiento de la convivencia ciudadana en el país están definidas en la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras (2011-2022). Este trabajo, está ampliamente respaldado en una creciente aplicación de una gestión policial aplicada bajo una filosofía de policía comunitaria y un ejercicio de coordinación de la acción del estado en todo el territorio. Esto, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia, bajo la dirección y rectoría de la Secretaría de Seguridad, institución responsable de la implementación de los programas y proyectos en materia de prevención del delito y la prevención de las violencias, y de la convocatoria y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.
- 1.3. Tanto la violencia homicida, como los distintos tipos de violencias contra la mujer y la violencia intrafamiliar en Honduras están altamente relacionados con el ambiente de violencia crónica que afecta al país, estimulado por el uso aceptado de la violencia como un mecanismo de resolución de conflictos. De hecho, el 76% del total de homicidios del país se comete con arma de fuego, lo que demuestra el alto grado de violencia letal que afecta el país, contrastando con el bajo reporte de victimización (18.3%) que se reporta para el país, ocupando el puesto #11 en América Latina y el Caribe (LAC).
- 1.4. Una de las principales brechas a resolver con urgencia, por su alto impacto social, es la alta incidencia de la violencia contra la mujer y la Violencia Intrafamiliar (VIF). En Honduras, según datos del poder judicial, la violencia contra la mujer es la segunda más denunciada en el Ministerio Público. Las denuncias recibidas por los fiscales vienen presentando una tendencia ascendente, aproximadamente un 10% al año, desde 2013. En 2015, las cifras de denuncias sólo en el Distrito Central (2.099), constituyeron el 20% de todo el país (10.495). Sólo en 2014, Medicinal Legal recibió un total de 9.360 requerimientos fiscales para evaluación médico legal, de las cuales el 26,4% correspondió a mujeres agredidas afectadas por lesiones personales y el

24,4% correspondió a delitos sexuales. De los delitos sexuales, el 91,4%, fueron realizadas a mujeres y niñas menores de 24 años, y el 17% del total a menores entre 10 y 18 años. Los departamentos que presentan más casos son: Francisco Morazán (29%), Cortés (23%), Comayagua (10%) y Atlántida (9%). La peor expresión de estas violencias es el femicidio, que se concentra en los departamentos de Cortés (31%) y Francisco Morazán (26,6%) del total de femicidios del país.

- 1.5. Para aportar a la solución de esta problemática, el Ministerio Público puso en marcha el Modelo de Atención Integral Especializada (MAIE), para la atención integral de las víctimas de violencias, particularmente mujeres víctimas de violencia. Los MAIE están conformados por fiscales, policías, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros profesionales. Esta atención multidisciplinar se encuentra concentrada en un solo espacio geográfico, equipado con diversas herramientas de atención, como la Cámara de Gesell, para tomar la declaración de las víctimas en un espacio cómodo, privado, con la asistencia de personal que comprende su situación y sin verse expuestas a la presencia de la persona que cometió el delito. Bajo estas condiciones, se garantiza la participación de víctimas y testigos en los procesos penales y con ello, la materialización de la justicia. La participación de la Policía Nacional en el MAIE ha sido crucial, ya que permite hacer más efectivo el servicio de atención a las víctimas de VIF, al coordinarse sus servicios con el MP al proveer espacios adecuados para atender a las víctimas, facilitar el proceso de denuncia y apoyar al MP en la implementación de las medidas cautelares, en algunos casos.
- 1.6. Con relación a la implementación de medidas cautelares para la prevención y atención de víctimas de VIF, en la región, se están llevando a cabo intervenciones innovadoras, como las del uso de los sistemas de vigilancia electrónico como una alternativa para proteger a las víctimas de violencia doméstica y sexual. El monitoreo electrónico de infractores ha sido introducido en diversas legislaciones, para disminuir la población carcelaria, los efectos adversos del encierro, los costos que ello acarrea y mejorar las posibilidades para la reinserción. También se usa ampliamente para prevenir posibles agresiones a personas en riesgo, como es el caso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
- 1.7. Este dispositivo se coloca en el tobillo o muñeca de la persona en conflicto con la ley penal o en la del victimario o posible agresor, y su finalidad es supervisar constantemente a la persona en espacios definidos previamente y transmitir su posición a una unidad de control. Por ello, su uso requiere de la combinación tanto de factores humanos como tecnológicos, debidamente regulados en las respectivas legislaciones nacionales. Su utilización está respaldada en varios instrumentos internacionales, tales como el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, las reglas de Tokio, entre otras.
- 1.8. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y el Comité Regional de Directores Penitenciarios, coinciden en que en caso de que los brazaletes electrónicos se usaran como un medio para proteger a las víctimas y testigos, los gobiernos deberían desarrollar protocolos específicos con el fin de dar prioridad a las víctimas más vulnerables, como en los casos de violencia doméstica. Recomendamos que los gobiernos primero identifiquen los problemas que se buscan solucionar, y luego, verifiquen si el uso de este tipo de tecnología es viable tanto normativa, como tecnológicamente, en cada país. En el caso de su uso como medida de protección para los casos de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, según estas organizaciones, el estado debe: (i) garantizar la aprobación de una

reglamentación que establezca el uso del brazalete electrónico de monitoreo como una medida cautelar de carácter personal e identifique la autoridad estatal responsable para implementar el programa de brazaletes electrónicos, donde se determine además, el rol de la autoridad competente para la concesión de la medida y la autoridad a cargo de su implementación; (ii) verificar la relación costo beneficio a largo plazo para garantizar la inversión inicial necesaria para la organización de un equipo de acompañamiento psico-social y la construcción de una central de monitoreo que cuente con el software y hardware adecuados; (iii) analizar la sostenibilidad de este proyecto considerando los gastos de personal e infraestructura a largo plazo para el mantenimiento de la central de monitoreo y el seguimiento de las medidas; y (iv) en los casos de violencia contra la mujer, definir una ruta crítica interna y externa para la protección de las víctimas de violencia doméstica, donde el brazalete electrónico de monitoreo esté contemplado como una de las alternativas de protección.

- 1.9. Esta ruta interna “hoja crítica de aplicación”, deberá contar con una etapa de investigación interdisciplinaria (informes sociales y psicológicos) que evalúe los riesgos sufridos por las víctimas (directas e indirectas) y recomiende la aplicación del brazalete electrónico conforme a las necesidades de cada caso. También deberá contemplar el trabajo interinstitucional necesario para implementar esta tecnología y definir con absoluta claridad cuáles son las autoridades judiciales, policiales y administrativas involucradas en el proceso de otorgamiento, cumplimiento y seguimiento de la medida.

2. Objetivos

- 2.1. El objetivo de esta consultoría es apoyar al Modelo de Atención Integral Especializada (MAIE) a través del diseño de una herramienta de registro para la derivación y seguimiento en la atención de casos de Violencia intrafamiliar y social.

3. Alcance de los Servicios

- 3.1. (Proporcionar requisitos detallados de los servicios de consultoría necesarios para que el proyecto / contrato tenga éxito)

4. Actividades Clave

- 4.1. La consultoría deberá realizar las siguientes actividades, sin perjuicio, de otras que considere relevantes para lograr el objetivo de la misma:
- 4.2. Asistencia Técnica especializada en la implementación de los mecanismos de derivación para la atención a víctimas de violencia intrafamiliar.
- 4.3. Apoyo en la implementación de los mecanismos de derivación para la atención a víctimas en los MAIE.

5. Resultados y Productos Esperados

- 5.1. Plan de trabajo.
- 5.2. Documento de análisis sobre la implementación de los mecanismos de derivación para la atención a víctimas de violencia intrafamiliar.
- 5.3. Reporte sobre la implementación de los mecanismos de derivación para la atención a víctimas

en los MAIE.

6. Calendario del Proyecto e Hitos

6.1. *(Defina el calendario de entregables e hitos para este proyecto / contrato. Es imperativo que todos los hitos, tareas, y el calendario de entregables sean lo más precisos posible, ya que las firmas consultoras deberán tener en cuenta estos elementos en sus propuestas.)*

7. Requisitos de los Informes

7.1. *(Describa los informes que la firma de consultoría tendrá que presentar para cada fase del proyecto. Por ejemplo: el alcance y la cronología de los informes de progreso; la necesidad de presentaciones / talleres; la cobertura y cronología de los informes, estableciendo los resultados de la consultoría. Defina también el lenguaje de los informes)*

8. Criterios de aceptación

8.1. *Experiencia en la implementación de mecanismos de derivación para la atención a víctimas de VIF en América latina y el Caribe. Familiaridad con los mecanismos innovadores para la atención a víctimas de VIF.*

9. Otros Requisitos

9.1. *(Describa los requisitos especiales, como los requisitos de seguridad, cualquier restricción de acceso /requisitos de TI o el tiempo de inactividad del sistema/de mantenimiento si es necesario.)*

10. Supervisión e Informes

10.1. *Esta consultoría será coordinada por Karelia Villa Mar (IFD/ICS), kareliav@iadb.org*

11. Calendario de Pagos

11.1. Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.

11.2. La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Para Selección de Fuente Única, indique el calendario de pagos de la siguiente manera, para otros métodos de selección, la Firma Consultora debe usar el Formulario 2 de Precios incluido en el SDP.

Plan de Pagos	
Entregables	%
1. <i>contra entrega y aprobación del producto</i>	20%
2. <i>contra entrega y aprobación del producto 2</i>	20%
3. <i>contra entrega y aprobación del producto 3</i>	60%
TOTAL	100%

[Estructura sugerida] Proceso de selección #::::::

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Modernización curricular de los módulos de formación de la policía para la atención, prevención y control de violencias que afectan a las mujeres y la VIF

HO-T1278

Número de Cooperación Técnica]

[Enlace web con el documento aprobado]

Apoyo a la prevención social de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana en honduras

1. Antecedentes y Justificación

- 1.1. Pese a los avances alcanzados por Honduras en la solución de sus problemáticas de seguridad ciudadana, el país aún tiene importantes brechas que atender, tanto en el ámbito de la modernización institucional, como el mejoramiento de los instrumentos para la atención, control y prevención de los distintos tipos de violencias y delitos que afectan al país.
- 1.2. Las estrategias principales para cerrar esas brechas en materia de prevención y control de los distintos tipos de violencias y delitos y el mejoramiento de la convivencia ciudadana en el país están definidas en la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras (2011-2022). Este trabajo, está ampliamente respaldado en una creciente aplicación de una gestión policial aplicada bajo una filosofía de policía comunitaria y un ejercicio de coordinación de la acción del estado en todo el territorio. Esto, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia, bajo la dirección y rectoría de la Secretaría de Seguridad, institución responsable de la implementación de los programas y proyectos en materia de prevención del delito y la prevención de las violencias, y de la convocatoria y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.
- 1.3. Tanto la violencia homicida, como los distintos tipos de violencias contra la mujer y la violencia intrafamiliar en Honduras están altamente relacionados con el ambiente de violencia crónica que afecta al país, estimulado por el uso aceptado de la violencia como un mecanismo de resolución de conflictos. De hecho, el 76% del total de homicidios del país se comete con arma de fuego, lo que demuestra el alto grado de violencia letal que afecta el país, contrastando con el bajo reporte de victimización (18.3%) que se reporta para el país, ocupando el puesto #11 en América Latina y el Caribe (LAC).
- 1.4. Una de las principales brechas a resolver con urgencia, por su alto impacto social, es la alta incidencia de la violencia contra la mujer y la Violencia Intrafamiliar (VIF). En Honduras, según datos del poder judicial, la violencia contra la mujer es la segunda más denunciada en el Ministerio Público. Las denuncias recibidas por los fiscales vienen presentando una tendencia ascendente, aproximadamente un 10% al año, desde 2013. En 2015, las cifras de denuncias sólo en el Distrito Central (2.099), constituyeron el 20% de todo el país (10.495). Sólo en 2014,

Medicinal Legal recibió un total de 9.360 requerimientos fiscales para evaluación médico legal, de las cuales el 26,4% correspondió a mujeres agredidas afectadas por lesiones personales y el 24,4% correspondió a delitos sexuales. De los delitos sexuales, el 91,4%, fueron realizadas a mujeres y niñas menores de 24 años, y el 17% del total a menores entre 10 y 18 años. Los departamentos que presentan más casos son: Francisco Morazán (29%), Cortés (23%), Comayagua (10%) y Atlántida (9%). La peor expresión de estas violencias es el femicidio, que se concentra en los departamentos de Cortés (31%) y Francisco Morazán (26,6%) del total de femicidios del país.

- 1.5. Para aportar a la solución de esta problemática, el Ministerio Público puso en marcha el Modelo de Atención Integral Especializada (MAIE), para la atención integral de las víctimas de violencias, particularmente mujeres víctimas de violencia. Los MAIE están conformados por fiscales, policías, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros profesionales. Esta atención multidisciplinar se encuentra concentrada en un solo espacio geográfico, equipado con diversas herramientas de atención, como la Cámara de Gesell, para tomar la declaración de las víctimas en un espacio cómodo, privado, con la asistencia de personal que comprende su situación y sin verse expuestas a la presencia de la persona que cometió el delito. Bajo estas condiciones, se garantiza la participación de víctimas y testigos en los procesos penales y con ello, la materialización de la justicia. La participación de la Policía Nacional en el MAIE ha sido crucial, ya que permite hacer más efectivo el servicio de atención a las víctimas de VIF, al coordinarse sus servicios con el MP al proveer espacios adecuados para atender a las víctimas, facilitar el proceso de denuncia y apoyar al MP en la implementación de las medidas cautelares, en algunos casos.
- 1.6. Con relación a la implementación de medidas cautelares para la prevención y atención de víctimas de VIF, en la región, se están llevando a cabo intervenciones innovadoras, como las del uso de los sistemas de vigilancia electrónico como una alternativa para proteger a las víctimas de violencia doméstica y sexual. El monitoreo electrónico de infractores ha sido introducido en diversas legislaciones, para disminuir la población carcelaria, los efectos adversos del encierro, los costos que ello acarrea y mejorar las posibilidades para la reinserción. También se usa ampliamente para prevenir posibles agresiones a personas en riesgo, como es el caso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
- 1.7. Este dispositivo se coloca en el tobillo o muñeca de la persona en conflicto con la ley penal o en la del victimario o posible agresor, y su finalidad es supervisar constantemente a la persona en espacios definidos previamente y transmitir su posición a una unidad de control. Por ello, su uso requiere de la combinación tanto de factores humanos como tecnológicos, debidamente regulados en las respectivas legislaciones nacionales. Su utilización está respaldada en varios instrumentos internacionales, tales como el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, las reglas de Tokio, entre otras.
- 1.8. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y el Comité Regional de Directores Penitenciarios, coinciden en que en caso de que los brazaletes electrónicos se usaran como un medio para proteger a las víctimas y testigos, los gobiernos deberían desarrollar protocolos específicos con el fin de dar prioridad a las víctimas más vulnerables, como en los casos de violencia doméstica. Recomiendan que los gobiernos primero identifiquen los problemas que se buscan solucionar, y luego, verifiquen si el uso de este tipo de tecnología es viable tanto normativa, como tecnológicamente, en cada país.

En el caso de su uso como medida de protección para los casos de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, según estas organizaciones, el estado debe: (i) garantizar la aprobación de una reglamentación que establezca el uso del brazalete electrónico de monitoreo como una medida cautelar de carácter personal e identifique la autoridad estatal responsable para implementar el programa de brazaletes electrónicos, donde se determine además, el rol de la autoridad competente para la concesión de la medida y la autoridad a cargo de su implementación; (ii) verificar la relación costo beneficio a largo plazo para garantizar la inversión inicial necesaria para la organización de un equipo de acompañamiento psico-social y la construcción de una central de monitoreo que cuente con el software y hardware adecuados; (iii) analizar la sostenibilidad de este proyecto considerando los gastos de personal e infraestructura a largo plazo para el mantenimiento de la central de monitoreo y el seguimiento de las medidas; y (iv) en los casos de violencia contra la mujer, definir una ruta crítica interna y externa para la protección de las víctimas de violencia doméstica, donde el brazalete electrónico de monitoreo esté contemplado como una de las alternativas de protección.

- 1.9. Esta ruta interna “hoja crítica de aplicación”, deberá contar con una etapa de investigación interdisciplinaria (informes sociales y psicológicos) que evalúe los riesgos sufridos por las víctimas (directas e indirectas) y recomiende la aplicación del brazalete electrónico conforme a las necesidades de cada caso. También deberá contemplar el trabajo interinstitucional necesario para implementar esta tecnología y definir con absoluta claridad cuáles son las autoridades judiciales, policiales y administrativas involucradas en el proceso de otorgamiento, cumplimiento y seguimiento de la medida.

2. Objetivos

- 2.1. El objetivo de esta consultoría es brindar capacitación técnica a la policía para la atención de mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar.

3. Alcance de los Servicios

- 3.1. (Proporcionar requisitos detallados de los servicios de consultoría necesarios para que el proyecto / contrato tenga éxito)

4. Actividades Clave

- 4.1. La consultoría deberá realizar las siguientes actividades, sin perjuicio, de otras que considere relevantes para lograr el objetivo de la misma:
- 4.2. Analizar el alcance curricular de los módulos de formación policial para la atención, prevención y control de violencias que afectan a las mujeres y la VIF.
- 4.3. Identificar los obstáculos, desafíos y limitaciones presente en los módulos de formación policial en materia de VIF.
- 4.4. Presentar un diseño de capacitación al modelo de formación técnica a la policía para la atención de mujeres víctimas de VIF.
- 4.5. Diseñar un plan de implementación del módulo de formación propuesto.

5. Resultados y Productos Esperados

- 5.1. Plan de trabajo.
- 5.2. Diseño de análisis del alcance curricular de los módulos de formación policial para la atención, prevención y control de violencias que afectan a las mujeres y la VIF.
- 5.3. Diagnóstico de los obstáculos, desafíos y limitaciones presente en los módulos de formación policial en materia de VIF.
- 5.4. Diseño de capacitación al modelo de formación técnica a la policía para la atención de mujeres víctimas de VIF.
- 5.5. Diseño de un plan de implementación del módulo de formación propuesto.

6. Calendario del Proyecto e Hitos

- 6.1. *(Defina el calendario de entregables e hitos para este proyecto / contrato. Es imperativo que todos los hitos, tareas, y el calendario de entregables sean lo más precisos posible, ya que las firmas consultoras deberán tener en cuenta estos elementos en sus propuestas.)*

7. Requisitos de los Informes

- 7.1. *(Describa los informes que la firma de consultoría tendrá que presentar para cada fase del proyecto. Por ejemplo: el alcance y la cronología de los informes de progreso; la necesidad de presentaciones / talleres; la cobertura y cronología de los informes, estableciendo los resultados de la consultoría. Defina también el lenguaje de los informes)*

8. Criterios de aceptación

- 8.1. *Conocimiento sobre planes de estudio de formación policial para la atención, prevención y control de violencias que afectan a las mujeres y la VIF. Experiencia elaborando módulos de formación técnica a la policía para la atención de mujeres víctimas de VIF.*

9. Otros Requisitos

- 9.1. *(Describa los requisitos especiales, como los requisitos de seguridad, cualquier restricción de acceso /requisitos de TI o el tiempo de inactividad del sistema/de mantenimiento si es necesario.)*

10. Supervisión e Informes

- 10.1. *Esta consultoría será coordinada por Karelia Villa Mar (IFD/ICS), kareliav@iadb.org*

11. Calendario de Pagos

- 11.1. Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.
- 11.2. La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Para Selección de Fuente Única, indique el calendario de pagos de la siguiente manera, para otros métodos de selección, la Firma Consultora debe usar el Formulario 2 de Precios incluido en el SDP.

Plan de Pagos	
Entregables	%
1. <i>contra entrega y aprobación de los productos 1 y 2</i>	20%
2. <i>contra entrega y aprobación de los productos 3 y 4</i>	20%
3. <i>contra entrega y aprobación del producto 5</i>	60%
TOTAL	100%

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO														
País: Honduras							Agencia Ejecutora: IDB					UDR: IFD/ICS		
Número de Proyecto: HO-T1278							Nombre del Proyecto: Apoyo a la prevención social de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana en Honduras							
Periodo cubierto por el Plan: 36 meses							Monto Total del Proyecto: \$ 200,000							
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Diagnóstico, mapeo y evaluación sobre la implementación de sistemas de monitoreo electrónico para victimarios de violencia contra intrafamiliar y análisis de viabilidad para atender y prevenir casos de VIF en Honduras.	\$ 80,000	SCS	Suma Alzada	\$ 80,000	100%	\$ -	0%	II TRIM 2018	III TRIM 2018	6 MESES	
Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Publicación de mejores prácticas en sistemas de monitoreo electrónico para victimarios en la atención y prevención de VIF.	\$ 10,000	TO	Selecc. Tipo de Contr:	\$ 10,000	100%	\$ -	0%	IV TRIM 2018	IV TRIM 2018	2 MESES	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Diseño y adaptación de la metodología de intervención para la atención y recepción de víctimas de VIF en los MAIE.	\$ 30,000	SCS	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	I TRIM 2019	II TRIM 2019	18 MESES	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Apoyo al funcionamiento de los mecanismos de derivación para la atención a víctimas en los MAIE.	\$ 30,000	SCS	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	II TRIM 2019	III TRIM 2019	12 MESES	
Componente 3	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Modernización curricular de los módulos de formación de la policía para la atención, prevención y control de violencias que afectan a las mujeres y la VIF	\$ 30,000	SCS	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	IV TRIM 2019	I TRIM 2020	6 MESES	
Componente 3	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Capacitación a los policías asignados a los MAIE en la ruta de atención a víctimas de violencia intrafamiliar)	\$ 20,000	TO	Selecc. Tipo de Contr:	\$ 20,000	100%	\$ -	0%	IV TRIM 2019	I TRIM 2020	6 MESES	
Preparado por:			TOTALES	\$ 200,000			\$ 200,000	100%	\$ -	0%				
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1”.														
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.														
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de selección para Firms Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Selección Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.														
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".														